

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024



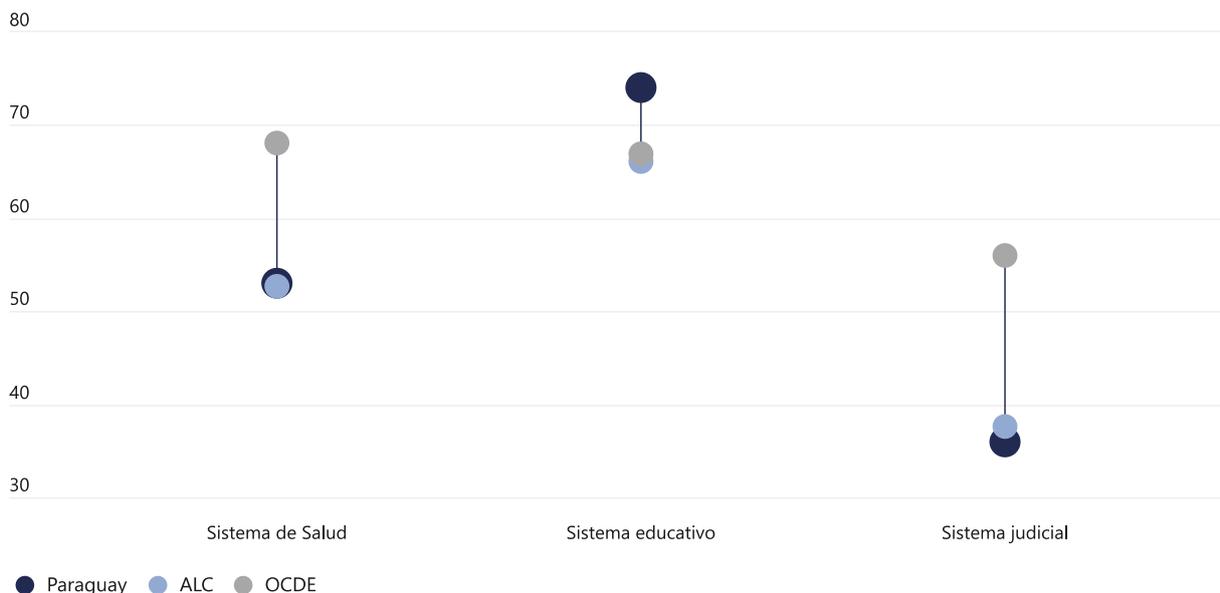
Paraguay

Confianza y satisfacción con los servicios públicos

La confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos son resultados importantes de la calidad de la gobernanza pública. Reflejan la percepción que tienen los ciudadanos de la competencia del gobierno en el diseño de políticas públicas y la prestación de servicios, así como sus expectativas sobre el comportamiento de las instituciones y los funcionarios públicos. La satisfacción con los servicios públicos y la confianza en las instituciones públicas, aunque no son resultados necesarios de la gobernanza democrática, pueden mejorar la eficacia de la gobernanza fomentando la participación en la vida pública, el cumplimiento de las políticas públicas y la cohesión social.

Una gran mayoría de los paraguayos está satisfecha con la educación y más de la mitad con el sistema de salud. Los paraguayos están más satisfechos con el sistema educativo, con un 74% de la población satisfecha en 2022, por encima de los promedios de ALC (66%) y de la OCDE (67%). El sector de la salud tiene una tasa de satisfacción del 53%, en línea con el promedio de ALC, pero 15 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la OCDE (68%). La satisfacción con el sistema judicial es del 36%, en línea con la media de ALC (38%).

Gráfico 1. Satisfacción con los servicios públicos, 2022



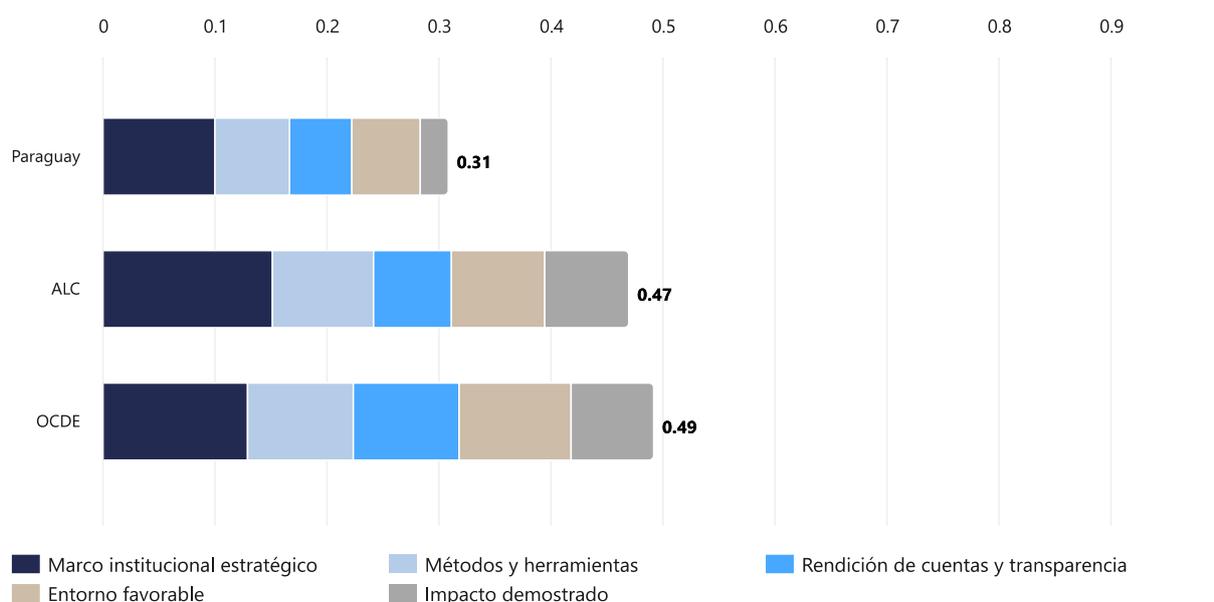
Buena gobernanza para la inclusión y la sostenibilidad

En una época de crisis múltiples, los países de América Latina y el Caribe necesitan adoptar prácticas de buena gobernanza que fomenten la inclusión y la sostenibilidad, elementos cruciales para promover la prosperidad y la resiliencia democrática. Entre las acciones clave están construir sobre las fortalezas de la democracia, incluyendo mejorar la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, así como fomentar la representación y la inclusión en la fuerza laboral pública. Además, los esfuerzos deben centrarse en reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, incluidos los enfoques presupuestarios y de contratación pública que apoyen la transición verde. Asimismo, la protección contra las amenazas a los valores democráticos exige que se mantengan normas eficaces de integridad pública y regulaciones sólidas contra las influencias indebidas.

Los procesos de gestión presupuestaria, como la presupuestación con perspectiva de género, pueden ayudar a promover medidas para cerrar las brechas de género. El Índice de Presupuestación con Enfoque de Género de la OCDE mide el desempeño de los países en cinco dimensiones de los mecanismos de presupuestación con enfoque de género: el marco institucional y estratégico para evaluar el impacto de género de las políticas presupuestarias y fiscales; los métodos y herramientas utilizados para implementar la presupuestación con enfoque de género; los mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; el entorno favorable para la implementación eficaz y coherente del marco presupuestario con enfoque de género; y el impacto de la presupuestación con enfoque de género en el desarrollo de políticas y las decisiones de asignación. De los 13 países de ALC encuestados, 10 practican la presupuestación con enfoque de género (77%), frente al 61% de los países de la OCDE.

Paraguay se sitúa por debajo de la media de ALC en el Índice de Presupuestación con Enfoque de Género. Obtiene una puntuación de 0.31, en una escala de 0 a 1, inferior a los promedios de ALC (0.47) y la OCDE (0.49). La puntuación más alta del país se encuentra en el marco institucional y estratégico (0.1). Hay margen de mejora en todas las demás dimensiones, especialmente en la de impacto, en la que obtiene una puntuación de 0.03.

Gráfico 2. Índice de presupuestación con perspectiva de género de la OCDE, 2022



La contratación pública -la compra de bienes, servicios y obras por parte de los gobiernos y las empresas estatales- representó un promedio del 17.4% del gasto público total en los países de América Latina y el Caribe en 2021. Las administraciones públicas están adoptando cada vez más la contratación pública como instrumento de política estratégica para promover objetivos sociales, por ejemplo, para fortalecer la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, favoreciendo la contratación verde y la conducta empresarial responsable, y para fortalecer la inclusión, incentivando la participación de diferentes grupos de personas y empresas como proveedores.

Paraguay ha desarrollado una estrategia a nivel de gobierno central para promover la contratación pública verde, la conducta empresarial responsable y la participación de las PYME en los procesos de contratación pública. En comparación, 14 países de ALC cuentan con una estrategia del gobierno central para promover la participación de las PYMES en la contratación pública, 9 países para la contratación pública verde y 7 para la conducta empresarial responsable.

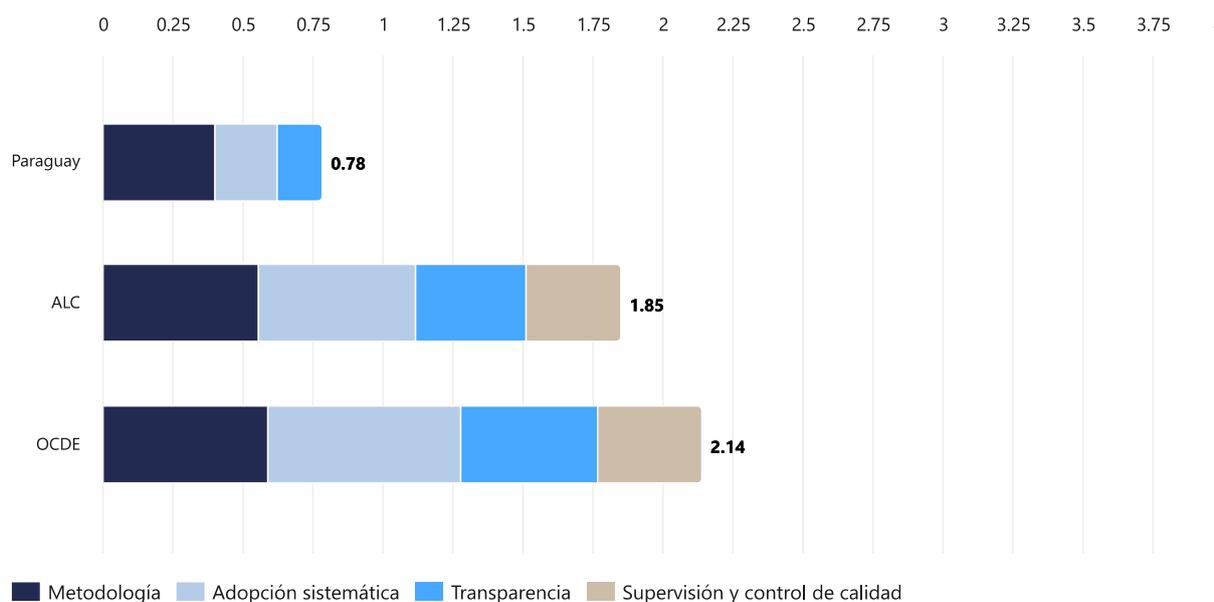
Gráfico 3. Contratación pública estratégica a nivel central para perseguir la sostenibilidad y la inclusión, 2022

	Compras verdes	PYME	Prácticas empresariales responsables
Se ha desarrollado una estrategia/política a nivel central	 Países de ALC: 9 Sí / 10 No	 Países de ALC: 14 Sí / 5 No	 Países de ALC: 7 Sí / 12 No
Algunas entidades de contratación han desarrollado una estrategia/política interna	Países de ALC: 6 Sí / 13 No	Países de ALC: 1 Sí / 18 No	Países de ALC: 3 Sí / 16 No
No hay estrategia o política	Países de ALC: 6 Sí / 13 No	Países de ALC: 7 Sí / 12 No	Países de ALC: 3 Sí / 16 No

Una participación significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones contribuye a mejorar el diseño y la aceptación pública de las políticas y los servicios públicos. El Índice de Gobernanza y Política Regulatoria (iREG) de la OCDE evalúa la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas (las aprobadas por el jefe de gobierno, los ministerios o el gabinete). Este indicador mide el desempeño de los países en involucrar sistemáticamente a las partes interesadas en la toma de decisiones públicas, el uso de herramientas, la transparencia de sus consultas y su supervisión y control de calidad. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países de ALC encuestados (73%) mejoraron su puntuación iREG en participación de las partes interesadas.

Paraguay se sitúa por debajo de la media de ALC en el índice iREG de participación de las partes interesadas la elaboración de regulaciones subordinadas. La puntuación total de Paraguay de 0.78, en una escala de 0-4, está por debajo del promedio de ALC (1.85) y de la OCDE (2.14). Su puntuación más alta se encuentra en la dimensión de metodología (0.4 de una puntuación máxima de 1), pero hay margen de mejora en todas las dimensiones, incluida la adopción sistemática de la participación de las partes interesadas (0.22), la transparencia (0.16) y la supervisión y el control de calidad (0).

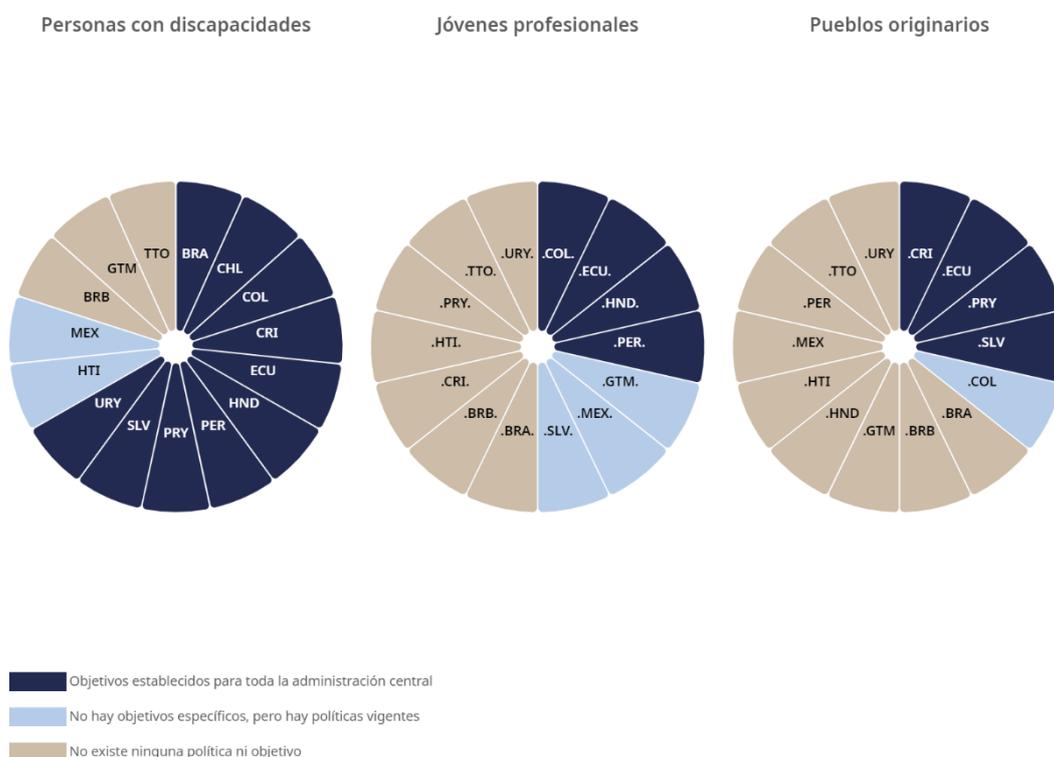
Gráfico 4. iREG sobre la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas, 2022



Una fuerza laboral diversa en el sector público es esencial para promover la representación y la inclusión de los grupos infrarrepresentados y vulnerables. Refuerza el rendimiento del gobierno al impulsar la innovación y contribuir a servicios públicos adaptados a las necesidades de la comunidad. Los gobiernos pueden utilizar políticas y objetivos para contratar y retener a los grupos infrarrepresentados en la fuerza laboral.

Paraguay cuenta con objetivos específicos para la inclusión de personas con discapacidad y pueblos originarios en la fuerza laboral pública a nivel central. Paraguay carece de políticas y objetivos para la inclusión de jóvenes profesionales. En comparación, entre los países de ALC encuestados, 10 de 15 tienen objetivos para las personas con discapacidad, 4 países tienen objetivos para jóvenes profesionales y para pueblos originarios.

Gráfico 5. Políticas y objetivos para mejorar la representación de grupos específicos en la administración central/federal, 2022



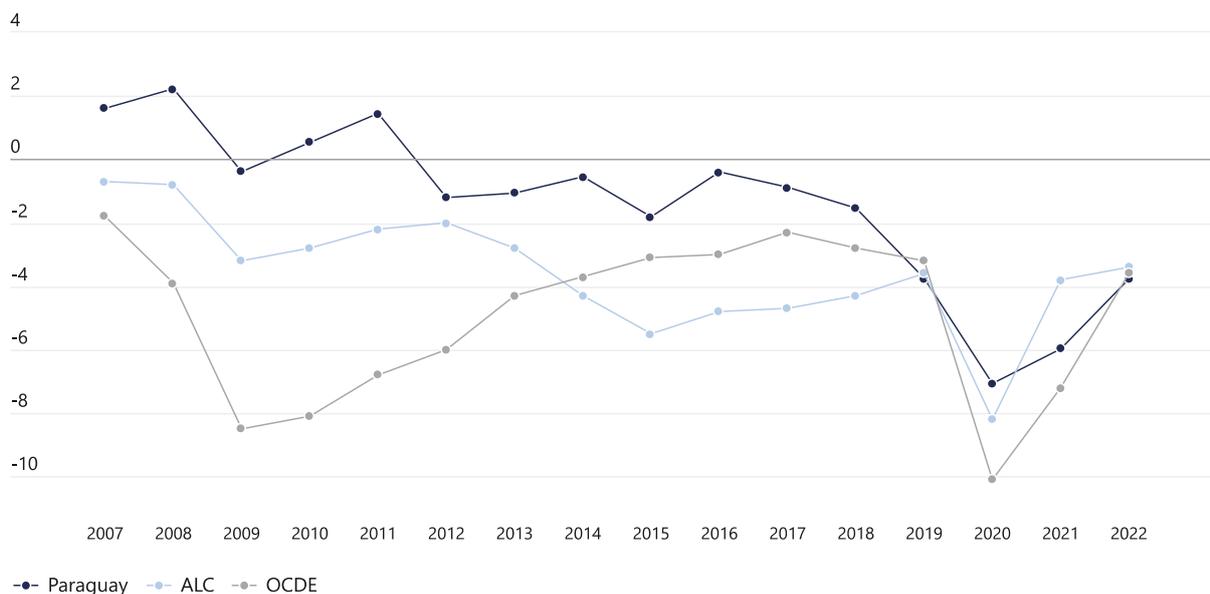
Uso y gestión de los recursos públicos

Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven.

Las finanzas públicas de la región de ALC muestran modestos signos positivos, tras un marcado deterioro en 2020. Este deterioro se debió a las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19, y a las medidas de apoyo a las empresas y a las personas para gestionar su impacto. Para el 2022, los balances fiscales -la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un año- ya se habían recuperado ampliamente a los niveles anteriores a la COVID en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo frágil.

En 2022, Paraguay tenía un déficit fiscal del 3.8% del PIB, ligeramente mayor que el promedio de los países de ALC (3.4%), y sin cambios en comparación con 2019. Los ingresos del gobierno representaron el 19.9% del PIB de Paraguay en 2022, en comparación con el 31.5% en promedio en los países de ALC y el 39.7% en los países de la OCDE. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB ha aumentado ligeramente desde el 19.2% en 2019.

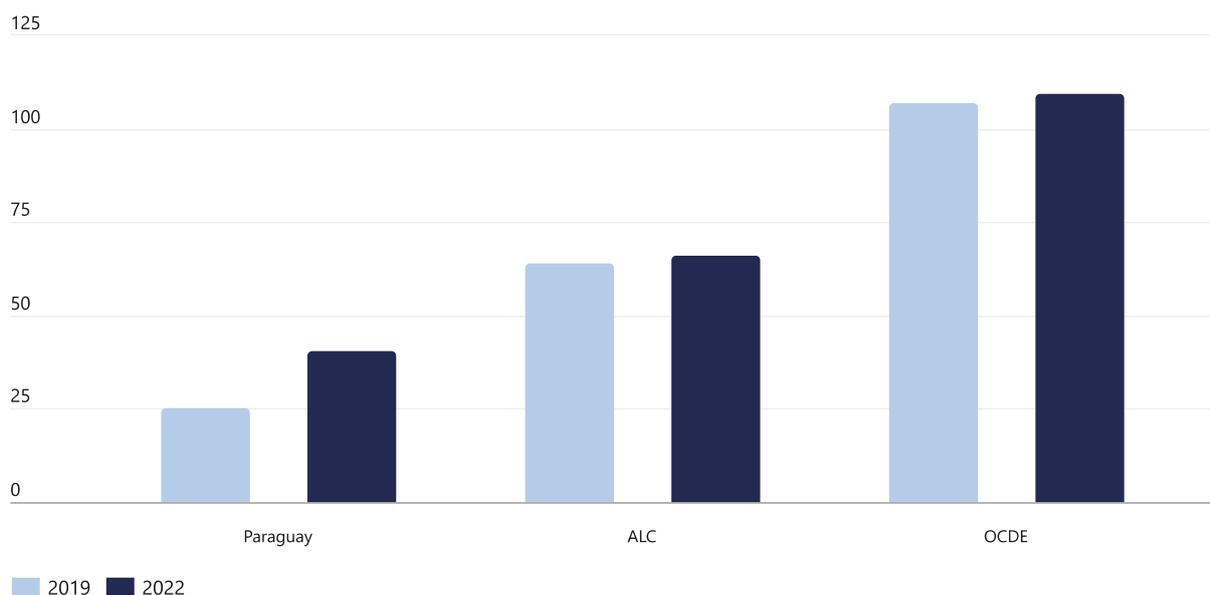
Gráfico 6. Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2007 - 2022



La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto el gasto corriente como las inversiones, pero tiene un costo en forma de pago de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y a la pérdida de ingresos fiscales, y en 2022 aún se mantenía 2 p.p. por encima de su nivel de 2019.

En 2022, la deuda pública de Paraguay ascendía al 40.8% de su PIB, por debajo del promedio de ALC del 66.3%. Su nivel de deuda ha aumentado desde el 25.8% del PIB en 2019.

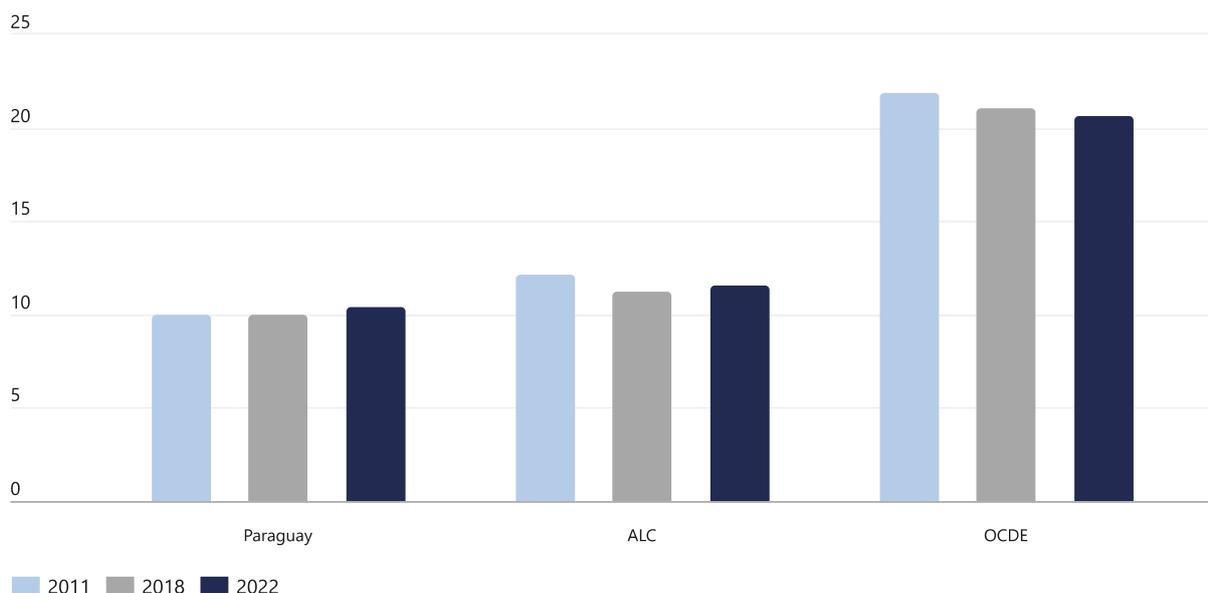
Gráfico 7. Deuda bruta de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022



Los empleados públicos están al frente del diseño y la formulación de políticas públicas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía considerablemente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.

En 2022, el empleo público en Paraguay era el 10% del empleo total, por debajo del promedio de ALC del 12% y de la OCDE del 21%. El empleo público en Paraguay se ha mantenido estable entre 2011 y 2022.

Gráfico 8. Empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022



Notas para los gráficos

Los datos sobre finanzas públicas y economía proceden de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del FMI (octubre de 2023), que se basa en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) y se extrajeron el 3 de noviembre de 2023. Para los promedios de la OCDE, los datos se basaron en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y se extrajeron de la base de datos en línea Panorama de las Administraciones Públicas, que representa la última actualización disponible: 5 de enero de 2024.

El balance fiscal, también denominado capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas, se calcula como el total de ingresos públicos menos el total de gastos públicos.

Los datos sobre empleo público proceden de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se extrajeron el 17 de febrero de 2023. Los datos se basan en la Encuesta de Población Activa. El empleo en el sector público abarca el empleo en el sector gubernamental más el empleo en empresas y sociedades residentes de propiedad pública.

Los promedios de ALC y la OCDE se refieren al promedio no ponderado, con la excepción de los indicadores de finanzas públicas.

Para más información, véase www.oecd.org/publication/government-at-a-glance-lac/2024/